

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2025

CONCEJO DE BOGOTÁ 07-05-2025 04:47:32

2025ER12070 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: ETB/CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: RTA PROP 564-2025

OBS: RECIBIDA POR CORREO EL 6-05-2025

DPS-062-2025
CECO: S2023

Doctora

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Subsecretaria de Despacho

Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público

CONCEJO DE BOGOTÁ

Dirección: Calle 36 No. 28A-41

E-mail: comision_tercera@concejobogota.gov.co; correspondencia@concejobogota.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta a Radicación No. 2025EE8094 O1 - Proposición No. 564 de 2025.

Respetada Doctora Monroy,

En relación con la **Proposición No. 564 de 2025**, aprobada en la sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá llevada a cabo el 27 de abril de 2025, cuyo tema corresponde a **“Situación de Seguridad, Seguridad Ambiental y Control del Microtráfico”**, presentada por los **Concejales Julián Espinosa Ortiz y Julián David Rodríguez Sastoque de la Bancada del Partido Alianza Verde**, recibida en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. (en adelante ETB) el 29 de abril de 2025, por delegación expresa y a nombre de ETB, damos respuesta de acuerdo con la información suministrada por el área encargada al interior de la empresa¹, iniciando por señalar que es nuestra disposición brindarla, siempre y cuando no se trate de una solicitud de información de carácter reservado y con el debido cuidado que como emisores de valores debemos tener, conforme a las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, así:

CONSIDERACIONES PREVIAS

1. Si bien ETB es una entidad descentralizada del Distrito, dada su vinculación especial al Sector Administrativo de Coordinación de Hábitat, igualmente, ETB es una sociedad comercial, con patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de derecho privado, de conformidad con los artículos 55 de Ley 1341 de 2009 (norma especial que regula el sector de las telecomunicaciones), 4 y 17 de la Ley 142 de 1994, aplicables por remisión expresa del inciso 3 del artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, y lo reconocido por la Honorable Corte Constitucional en sentencias C-736 de 2007 y T-181 de 2014.

2. ETB es una empresa prestadora de los servicios públicos **no domiciliarios de telecomunicaciones**, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, la cual regula lo relacionado con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En materia específica de regulación de telecomunicaciones, el Legislador, a través de la Ley 1341 de 2009, le confirió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- y al Ministerio de Tecnologías de la

¹ Dirección Desarrollo de Personas de la Vicepresidencia de Talento Humano y Administrativa.
07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.

Información y las Comunicaciones – MINTIC- la función de regular la prestación del servicio. Por tanto, la actividad de ETB como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (en adelante PRST), se encuentra sujeta a la normatividad regulatoria expedida por dichas entidades, y en esa medida, se aclara que son el MINTIC y la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC, en el marco de sus competencias, las autoridades que ejercen las funciones de inspección, vigilancia y control de los PRST.

3. Así las cosas, si bien el inciso primero del artículo 54 del Acuerdo Distrital 741 de 2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá), establece que en cumplimiento de la función de control político el Concejo de Bogotá podrá citar, entre otros, a los Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas, y si bien ETB es una entidad descentralizada del distrito, igualmente, debemos indicar que **ETB cuenta con una naturaleza jurídica especial**, al ser una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad comercial por acciones, que en desarrollo de su objeto social ejerce una actividad comercial dentro de un mercado en competencia en su calidad de PRST, **conforme a las normas del derecho privado**, que no cumple gestión pública, ni se encuentra sujeta al régimen de la función pública, no actúa como una autoridad administrativa, ni tiene a su cargo el diseño, liderazgo, promoción y desarrollo de políticas públicas, ni de programas o proyectos de igual índole, no hace parte del presupuesto público, es decir, su operación no se encuentra sujeta a algún tipo de régimen público, pues ETB no ejerce el “*imperium*” propio de las entidades del Estado.

4. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la función de control especial del Concejo de Bogotá en relación con las empresas prestadoras de servicios públicos, resulta oportuno realizar la siguiente aclaración, si bien el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que el ejercicio del control político por parte del Concejo lo desempeña a través de (i) citaciones para que los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y al Contralor comparezcan ante el Concejo y respondan a un cuestionario previamente escrito; (ii) solicitud de información escrita a determinadas autoridades municipales, sobre el ejercicio de su cargo; y (iii) por medio de la moción de observaciones; lo anterior fue modificado con la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, la cual al regular esta materia, estableció que esta facultad del Concejo se limitaba a los representantes legales de empresas de servicios públicos domiciliarios sean públicos o privados.

Lo anterior, encuentra asidero al tener en cuenta que en lo no regulado por el Decreto 1421 de 1993 para funcionamiento y organización del Distrito Capital de Bogotá se aplica el régimen de municipios, es decir, la ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, la cual expresamente señaló que es atribución del Concejo citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito, estipulando a renglón seguido, que la empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Ahora, el artículo 54 del Acuerdo Distrital 741 de 2019, modificado por el artículo 11 del Acuerdo 837 de 2022, en su inciso segundo prevé que: “*Así mismo, se podrá citar a control especial a los Representantes Legales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1551 de 2012*”; al 07-07-7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

13/06/2023

Pág. 2

respecto, es necesario aclarar que **a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 (modificada por la Ley 1978 de 2019), la categoría de servicios domiciliarios de telecomunicaciones fue excluida del ordenamiento jurídico (los servicios de telecomunicaciones no son servicios públicos domiciliarios, ni estamos vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)**. En efecto, conforme al artículo 73 -vigencias y derogatorias- de la Ley 1341 de 2009, las empresas que venían prestando servicios de telecomunicaciones con sujeción a lo establecido en la ley 142 de 1994, quedaron excluidas de la aplicación del régimen de la citada ley 142, y cobijadas por la Ley 1341, siendo un marco jurídico especial que prevalece sobre cualquier otra norma de tipo general. Teniendo en cuenta lo anterior, **al no ser ETB una empresa de servicios públicos domiciliarios, esta compañía no puede ser sujeto del control especial previsto en la ley 1551 de 2012, ni del artículo 54 del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá** y, por consiguiente, la empresa no puede ser destinataria de proposiciones del Concejo de Bogotá, ni objeto de citaciones a sesiones de debates de control político de dicha Corporación.

5. De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente tener en cuenta respecto al ejercicio de la función de control político, que mediante la **Sentencia T-181 de 2014** la Corte Constitucional señaló que dicho control *“no se enmarca dentro de los fines constitucionales enunciados anteriormente, puesto que, no es el caso de un control fiscal que ampara un fin tributario, ni un control que persiga un fin judicial, ni mucho menos el ejercicio de un control de inspección, vigilancia e intervención propio del cumplimiento de las funciones de las Superintendencias frente a las empresas que prestan servicios públicos”* (se subraya). De tal manera, el espíritu de esta decisión judicial es el de reconocer que son las entidades que cuentan con las competencias constitucional y legalmente establecidas, las que se encuentran facultadas para cumplir con tales funciones de vigilancia y control.

Acá es importante resaltar, en todo caso, lo mencionado por la Corte Constitucional, en la misma sentencia, frente al control político sobre ETB, el cual se adelantará sobre los documentos o informes que presenta al público como todas las sociedades comerciales y, sobre los documentos que pueden ser solicitados a las autoridades competentes en desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y auditoría. Así mismo, se podrá adelantar frente a los accionistas o miembros de junta de la entidad que estén sujetos al control político bajo el artículo 14 y 15 de la ley 1421 de 1993.

6. De otra parte, no puede perderse de vista que ETB desarrolla su objeto social y actividad comercial en el mercado altamente competitivo del sector de las telecomunicaciones, en el que como sociedad comercial requiere desenvolverse en un plano de igualdad frente a sus competidores; lo anterior, amparado a su vez en la libre competencia económica como derecho de rango constitucional, que conforme al artículo 333 de la Constitución Política de 1991, debe ser garantizado y no ser objeto de restricciones.

Lo anterior, se refleja, por ejemplo, en el amparo legal de la reserva² de la información confidencial, sensible, estratégica y del secreto comercial de ETB, que se encuentra sometida a reserva mercantil, pues se refiere a aquellas actividades desarrolladas por ETB que resultan equiparables a las de sus competidores, las cuales son desplegadas dentro de un mercado en el que es necesario competir en igualdad de condiciones; y, conforme a lo previsto en la Ley,

² Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, los numerales 4 y 5 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el artículo 61 del Código de Comercio, lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia T-181 de 2014 (de la cual ETB fue parte), y lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en trámites de insistencia presentados por Concejales de Bogotá, así como por jueces de la república en sede de tutela. 07-07-7-F-020-v.8

13/06/2023

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

Pág. 3

es deber de los administradores de la sociedad proteger la reserva comercial y abstenerse de revelar la información de naturaleza confidencial de la misma.

Por tanto, las estrategias y criterios de negocios de ETB son protegidos, de la misma manera como se protegen los secretos industriales y comerciales de otras empresas, para impedir que, con su acceso, se pueda afectar el ejercicio de las libertades económicas. Al proteger la información, se protege la actividad productiva, industrial o comercial, referida a la naturaleza, las características o finalidades de los productos o servicios, los métodos, formas o procesos de distribución o comercialización de bienes o servicios y al manejo gerencial de la sociedad. El secreto goza de reserva y se traduce en información clasificada para otorgar al titular una ventaja en el mercado que le permite diferenciarse de sus competidores y ser más eficiente, con el fin de ser competitivo en el mercado.

7. Finalmente, teniendo en cuenta la temática de la Proposición del asunto, es importante aclarar que el régimen de vinculación laboral de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST-, como ETB, es el de derecho privado, en virtud del régimen especial que como se indicó, es la Ley 1341 de 2009, el cual se materializa con la celebración de contratos de trabajo entre la compañía y sus trabajadores, regidos por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo; en consecuencia, el régimen de contratación de personal de ETB no corresponde a la vinculación legal y reglamentaria de la función pública y el empleo público que se encuentra reglamentada en el Decreto 1083 de 2015, no siendo este último aplicable a la compañía.

Bajo el anterior entendimiento, y con estas aclaraciones, procedemos a dar respuesta a los dos numerales de la Proposición 564 de 2025 en relación con la información de carácter público susceptible de entrega, así:

“Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB):

*Según el acuerdo 106 Del 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROMOCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, las entidades del Distrito Capital **debían implementar una política de primer empleo priorizando los siguientes grupos:***

- Los jóvenes.
- Mujeres cabeza de familia.
- Personas mayores.
- Población rural.
- Víctimas del conflicto.
- Migrantes.
- Reincorporados.
- Personas con discapacidad.
- Víctimas de violencias basadas en género.
- Población indígena.
- Población negra.
- Afrocolombiana.
- Raizal.
- Palenqueros.

07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

13/06/2023

Pág. 4

1) Por lo anterior, le solicito a su entidad un informe detallado, desde el 2024 a lo corrido del 2025, con el número de personas contratadas (En todas sus modalidades) que pertenezcan a estos grupos sociales como primer empleo”.

Respuesta:

La información solicitada no se encuentra publicada en la página web de ETB ni en el Reporte Integrado 2024, razón por la cual es de carácter reservado y no es posible su entrega.

Sin embargo, es importante mencionar que la “*Política de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad e Inclusión de ETB*”, establece los lineamientos en esta materia, que orientan el desarrollo de las actividades empresariales y ha tomado como referencia los 10 Principios del Pacto Global, la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital, los principios para el empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Así mismo, en ETB contamos con una política de selección de personal donde los procesos de reclutamiento, selección y vinculación se realizan sin distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional, discapacidades, orientación sexual u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.

En materia de igualdad dentro de los procesos de reclutamiento y selección, la empresa sigue fortaleciendo sus procedimientos para garantizar que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de ser contratados y para ello, se evalúa su idoneidad con base en sus perfiles, experiencia, habilidades y competencias, considerando los requisitos del negocio y su alineación con la estrategia corporativa.

Ahora bien, cualquier otro detalle o especificidad de la información solicitada es de carácter privado, confidencial y del secreto comercial de ETB, que goza de reserva legal, no siendo susceptible de entrega, teniendo en cuenta lo previsto en los numerales 3 y 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, aunado a lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995³, el artículo 61 del Código de Comercio⁴, lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia T-181 de 2014 (de la cual ETB fue parte), y lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en trámites de insistencia⁵ presentados por Concejales de Bogotá, así como

³ “ARTICULO 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función los administradores deberán: (...) 4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. (...)”.

⁴ “ARTÍCULO 61. EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de las compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las mismas”.

⁵ Sentencia del 17 de agosto de 2016, Expediente 250002341000201601622-00, M.P. Dra. Patricia Afanador Armenta; Sentencia del 9 de marzo de 2017, Expediente 25000234100020170028600, M.P. Dr. Felipe Alirio Solarte Maya; Sentencia del 13 de mayo de 2019, Proceso No. 25000-23-41-000-2019-00260-00, M.P. Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno; Expediente 25000-23-41-000-2022-01091-00, M.P. César Giovanni Chaparro Rincón; Expediente 250002341000202201588-00, M.P. Luis Manuel Lasso Lozano; Sentencia del 08 de mayo de 2024, Expediente 25000234100020240074400, M.P. Luis Norberto Cermeño.
07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

por jueces de la república en sede de tutela⁶. Se trata de información sometida a la reserva mercantil, y conforme a lo previsto en la Ley, es deber de los administradores de la sociedad proteger la reserva comercial y abstenerse de revelar la información de naturaleza confidencial de la misma.

En el caso de las empresas de servicios públicos mixtas, la Corte Constitucional en la **Sentencia T-181 de 2014, en la que ETB fue parte**, consideró que “cuando se trate de documentos de carácter privado, contrario a lo dispuesto para el acceso a los documentos públicos, la regla general es la reserva, en tanto la ley no disponga excepcionalmente su exhibición o la expedición de copias”, y que son documentos privados que gozan de reserva “aquellos que sean originados del ejercicio de las funciones que realice la entidad, equiparables a las que realizan los particulares en un mercado donde se necesita que compita en igualdad de condiciones para la eficaz prestación del servicio”.

Finalmente, resulta pertinente precisar, en todo caso, **respecto al ejercicio de la función de control político**, que mediante la **Sentencia T-181 de 2014** la Corte Constitucional señaló que dicho control “no se enmarca dentro de los fines constitucionales enunciados anteriormente, puesto que, no es el caso de un control fiscal que ampara un fin tributario, ni un control que persiga un fin judicial, ni mucho menos el ejercicio de un control de inspección, vigilancia e intervención propio del cumplimiento de las funciones de las Superintendencias frente a las empresas que prestan servicios públicos”; lo anterior, igualmente va en consonancia con lo que ha sido considerado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver recursos de insistencia presentados por Concejales de Bogotá⁷, y por jueces de la república en sede de tutela, como se indicó líneas atrás.

La jurisprudencia ha señalado que se puede ejercer el control político a través de la información que es de carácter público, así como en virtud de los informes que la sociedad comercial presenta al público y a las autoridades que las vigilan, inspeccionan y auditan, y en tal sentido, no se vulnera el ejercicio de su derecho; por tanto, la información confidencial que goza de reserva legal no es susceptible de entrega en virtud de la función de control político.

“2) Le solicito a su entidad un informe detallado, desde el 2024 a lo corrido del 2025, con el número de personas contratadas (En todas sus modalidades) que pertenezcan a estos grupos sociales”.

Respuesta:

Como se mencionó en la respuesta anterior, la información solicitada no se encuentra publicada en la página web de ETB ni en el Reporte Integrado 2024, razón por la cual es de carácter reservado y no es posible su entrega, por las razones expuestas en dicha respuesta, a las cuales nos remitimos.

Únicamente, en el reporte integrado 2024 se publicó la población joven (menos de 30 años) y la población mayor de 50 años, razón por la cual se remite a continuación:

⁶ Sentencia del Juzgado Veinte Penal del Circuito con Función de Conocimiento (25 de junio de 2024), que resuelve la impugnación de la sentencia de tutela presentada por el Concejal de Bogotá Angelo Schiavenato; sentencia del Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías (08 de julio de 2024), que resuelve la impugnación de la sentencia de tutela presentada por la Concejal de Bogotá Heidy Sánchez.

⁷ Por ejemplo, Expediente 25000-23-41-000-2022-01091-00, M.P. César Giovanni Chaparro Rincón; Expediente 250002341000202201588-00, M.P. Luis Manuel Lasso Lozano.
07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

	2024	
	Hombres	Mujeres
Menores de 30 años	5	8
Mayores de 50 años	2	3
Total	7	11

En los anteriores términos damos respuesta de manera completa, oportunamente y de fondo a su comunicación del asunto.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Coordinador Asuntos Públicos y Sostenibilidad
Secretaría General y Asuntos Corporativos

Proyectó: Javier David Jiménez Solanilla – Profesional Especializado – Secretaría General y Asuntos Corporativos